

1

ESPAÑA 1993

**una interpretación
de su realidad social**



Fundación Encuentro

Centro de Estudios del Cambio Social (C.E.C.S.)

La Fundación Ramón Areces, la Empresa Iberdrola y la Fundación Encuentro sostienen, en este Centro de Estudios, el Departamento de Elaboración de Datos, la Biblioteca y el Banco de Datos, así como el Centro de Documentación Europea y de las Comunidades Autónomas. Todos ellos sirven de base al Equipo de Investigadores encargados de redactar el “Informe Anual sobre la realidad social española”.



Edita: Fundación Encuentro
Alvarez de Baena, 7, Bajo
28006 Madrid

ISBN: 84-89019-00-2
Depósito Legal: M-27134-1994

Fotocomposición e Impresión: Comprint, S.L.
Albadalejo, 6 - 28037 Madrid

1

ESPAÑA 1993

**una interpretación
de su realidad social**



Fundación Encuentro

Centro de Estudios del Cambio Social (C.E.C.S.)

La Fundación Ramón Areces, la Empresa Iberdrola y la Fundación Encuentro sostienen, en este Centro de Estudios, el Departamento de Elaboración de Datos, la Biblioteca y el Banco de Datos, así como el Centro de Documentación Europea y de las Comunidades Autónomas. Todos ellos sirven de base al Equipo de Investigadores encargados de redactar el “Informe Anual sobre la realidad social española”.



Edita: Fundación Encuentro
Alvarez de Baena, 7, Bajo
28006 Madrid

ISBN: 84-89019-00-2
Depósito Legal: M-27134-1994

Fotocomposición e Impresión: Comprint, S.L.
Albadalejo, 6 - 28037 Madrid

Parte Primera

CONSIDERACIONES GENERALES

¡Atención, cambio de rasante!

Esta señal viaria no es necesaria. Cualquier mediano conductor está familiarizado con el cambio de rasante. En una ondulación del terreno, a cierta distancia de la otra vertiente, pierde la visión de la carretera. No frena en seco, para comprobar si al otro lado continúa la misma calzada. Basta que se sitúe prudentemente a la derecha y no trate de adelantar al vehículo que va delante. Podría encontrarse con otro que rueda en dirección contraria.

Como metáfora puede servir para explicar situaciones de alarma social o de algo que sería más grave en nuestro tiempo: el proceso de socialización creciente de ese tipo de alarma. La sensación de quien no controla su propio contexto socioeconómico, le deja abandonado a todas las incertidumbres. Estas surgieron, ya en la crisis de los años 70, en el ámbito de la vida económica. Crecieron desmesuradamente a partir de 1990, para sumarse al sobresalto de la crisis política durante el trienio 1991-93. La crispación de la lucha partidista condujo a las elecciones del 6-J de 1993. No podemos negar que ciertas ambigüedades del texto constitucional han dado pie a los enfrentamientos que ahora dominan el panorama de la vida pública española.

En los años 60, la lógica de los mercados y los modelos democráticos del entorno consiguieron que las gentes de España comenzaran a cambiar sus puntos de referencia. Concentraron su atención en Europa. Entrar en el Mercado Común significaba mucho más que liberalizar la economía y admitir la competitividad de los mercados. Suponía necesariamente aceptar el sistema de libertades del Estado social y democrático de derecho, semejante al de los países de nuestro entorno. No se podía entender la «modernización de España» sin esta sincronización con el sistema democrático de las libertades. Había que emprender el camino de Europa con todas sus consecuencias.

Un cambio histórico profundo de puntos de referencia. Desde el siglo XVIII nos habíamos dejado llevar por los sentimientos de decadencia. Uno de los impulsos predominantes de la ideología franquista pretendió devolver el espíritu nacional al sueño imperialista del pasado. La transición a la democracia, en cambio, tenía que hacerse con la mirada puesta en el presente. El gran pacto político de la Constitución abrió los tres grandes procesos: el democrático, el autonómico y el de

la internacionalización económica. Más pronto o más tarde tendrían que enfrentarse inevitablemente con el gran «problema moral», es decir, el de la interiorización de las normas democráticas y, en definitiva, la transformación de las conductas, tanto de los gestores de la cosa pública como de cada uno de los españoles. Nadie pudo imaginarse que pudiera funcionar una democracia sin ciudadanos. Una vez creado el marco constitucional y las instituciones democráticas, quedaba la ardua tarea de maduración, a través de la cual los españoles abandonarían su condición de súbditos para convertirse en ciudadanos. En otras palabras, había que recrear la moral pública o, si se quiere, «moralizar la moral» vigente.

Europa, más que un modelo soñado, era ahora el camino para solucionar los grandes problemas de nuestra convivencia. En el triángulo del desarrollo económico, del desarrollo social y del desarrollo moral, teníamos que entender la ansiada «modernización de España». No debería sorprendernos que, en ese camino, tuviéramos que experimentar las tensiones de esos tres desafíos. Las vacilaciones, las incertidumbres, la disminución de la visibilidad, la novedad de paisajes antes desconocidos, en determinados momentos como el actual, requieren esfuerzos extraordinarios de lucidez, de coherencia y agilidad, para no salirse de la calzada. El proceso emprendido es irreversible y ningún conductor sensato, ante el cambio de rasante, se permite cuestionar la continuidad de la carretera.

Pero Europa no ha sido nunca un modelo estático. Por el contrario, se caracterizó siempre por su capacidad de metamorfosis continua. Y llegábamos a ella en uno de sus momentos más dinámicos, en los ámbitos político, económico y social: el final de la guerra fría, la desintegración de la URSS, con la proclamación de independencia de las tres repúblicas bálticas (1988-90) y la caída de Gorbachov (noviembre, 1991); el derrumbamiento del muro de Berlín (noviembre, 1989), la reunificación de Alemania (agosto, 1990) y la precipitada y costosa absorción económica de la ex-RDA; las diversas transiciones en los países del Este y la disolución del Pacto de Varsovia; la invasión de Kuwait (agosto, 1990) y la guerra del Golfo (1991); la disolución cruenta de la antigua Yugoslavia (verano de 1991). Todos estos acontecimientos crearon nuevas condiciones geopolíticas. Y no pocos de ellos pusieron de manifiesto la desunión de los Estados miembros de la Unión Europea.

Por otra parte, queríamos integrarnos en una organización supranacional fundamentalmente económica, sometida al vaivén de concepciones opuestas: la de un espacio económico de libre cambio en el

que no se limitara la soberanía de los Estados y la de una verdadera unión política; la de dar primacía a su consolidación interna y la de abrir sus puertas a la integración de otros Estados; la de llegar cuanto antes a la unión monetaria y la de mantener la flexibilidad de las diversas monedas con una simple referencia al ecu; entre la Europa social y la Europa del Mercado Unico. Las turbulencias internas del Sistema Monetario Europeo (la libra esterlina abandona el SME el 16 de septiembre de 1992, seguida después por la lira italiana), los debates sobre la competitividad, sobre la creación de empleo, el problema del déficit democrático y la euroburocracia de Bruselas, y los debates nacionales sobre la ratificación del Tratado de la Unión contribuyeron a aumentar el euroescepticismo en las opiniones públicas nacionales. Desde la firma del Tratado (Maastricht, 7 de febrero de 1992) hubo que esperar doce meses hasta superar el último obstáculo del Tribunal de Karlsruhe.

Los sondeos periódicos de opinión, realizados por Eurobarómetro¹ en otoño y primavera de cada año, demuestran que a partir del verano de 1991, varios meses antes de la reunión de Maastricht, el apoyo de la opinión pública del conjunto de los países miembros comienza a debilitarse, para bajar a niveles que Dinamarca y el Reino Unido habían mostrado ya en 1987-88.

Comparemos brevemente la curva descendente de la opinión pública española con la seguida por la media de la Comunidad, en las respuestas a cada una de las cuatro grandes cuestiones planteadas periódicamente.

	Respuestas		1991 %	1993 %	Variación 1991-1993
De forma general, ¿está usted a favor o en contra de los esfuerzos realizados para conseguir la unión de Europa occidental?	«A favor»	Media europea	81	73	-8
		España	86	78	-8
De una manera general, ¿piensa usted que es bueno o malo que su país pertenezca a la Comunidad Europea?	«Es bueno»	Media europea	72	57	-15
		España	78	54	-24
Tomando en consideración los diversos aspectos, ¿estima usted que su país se ha beneficiado como miembro de la Comunidad Europea?	«Sí»	Media europea	59	45	-14
		España	58	40	-18
Si se anunciara mañana que se abandona el proyecto de la Comunidad Europea, ¿se sentiría usted defraudado?	«Sí»	Media europea	50	40	-10
		España	54	36	-18

¹ Utilizamos las tablas, gráficos y estudios presentados por Eurobaromètre, *L'opinion publique dans l'union européenne*, n° 40, diciembre, 1993.

Según estos datos, el apoyo de la opinión pública española al proyecto comunitario en 1991 era notablemente superior al conjunto de los doce (preguntas 1ª, 2ª y 4ª). En cambio, ya en 1991, el porcentaje de españoles que hacían balance positivo de nuestra incorporación era un punto inferior a la media europea (pregunta 3ª). En diciembre de 1993 el descenso de los porcentajes de apoyo en el conjunto de los países miembros, resulta espectacular: oscila entre 8 y 15 puntos. La acusada falta de entusiasmo por Europa en España ese mismo año (diciembre 1993) es aún más sorprendente. Supera con mucho a la desilusión del conjunto de la Unión. Baja 24 puntos el porcentaje de los que pensaban en 1991 que era «bueno» pertenecer a la Unión. Los que pensaban en 1991 que nos habíamos «beneficiado» descienden 18 puntos. Y no deja de sorprender que en 1993 tan sólo un 36% sentirían que se abandonara el proyecto comunitario. ¿Cómo explicar este significativo aumento del pesimismo de los españoles respecto a la Unión?

El Parlamento español ratificó el Tratado de la Unión sin convocar un referéndum y sin que la oposición presentase grandes objeciones. Contrasta este hecho con el bajo nivel de información confesado por los españoles. Según los sondeos de Eurobarómetro², pertenecemos al grupo de países miembros que se consideran peor informados sobre las instituciones y los procesos de la Unión. Un 75% confiesa estar «muy mal» + «bastante mal» informados. Los porcentajes más altos, no lejanos del nuestro, de mala información, los dan Grecia (78%), Italia (77%), Portugal (76%) y el Reino Unido (76%). ¿Nos dejamos llevar por el sentimiento de necesidad o fue el desconocimiento, la razón de nuestro entusiasmo europeísta?

Recordemos brevemente algunos acontecimientos de nuestros procesos internos. El 1 de junio de 1989 sometimos la peseta a la disciplina del SME. Tuvimos que devaluarla sucesivamente y desprendernos del 30% de nuestra reserva de divisas, para poder permanecer en un SME flexibilizado hasta un 15%.

Las tormentas monetarias difundieron la alarma. Nuestra economía ya no caminaba hacia Europa. Durante 1993 se fue manifestando el alejamiento de nuestras condiciones económicas reales respecto a las idílicas contempladas en el Programa de Convergencia elaborado por el Gobierno. En nuestro caso preocupaba especialmente la fuerte expansión del déficit público, que, en un contexto marcadamente re-

² *Ibidem*, p. 38.

cesivo, alcanzó el 7,3% del PIB, frente al 4,4% de 1992, cuando lo proyectado para el año en curso era un 3,5%. La deuda pública se disparó hasta el 55,6% del PIB, un porcentaje muy cercano al límite (60%) fijado por el Tratado de Maastricht. El Gobierno tuvo que restringir los presupuestos generales expansivos que habían sido aprobados para todo el año, entre otras razones para cubrir el déficit de medio billón del Inem. Solamente los tipos de interés a largo plazo pudieron mantener una evolución favorable. Habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Las políticas de convergencia con Europa y de ajuste presupuestario se hacían cada vez más difíciles por chocar de frente con los objetivos sociales. Nuestra industria no conseguía el grado de competitividad necesario. Los efectos de la política agraria pesaban negativamente sobre la opinión pública. Europa experimentaba también el receso económico. Los vientos europeos comunitarios no podían ayudarnos. El desempleo, con su crecimiento implacable, fue oscureciendo progresivamente el horizonte económico y político.

Pero la crisis española no es sólo económica. España comenzó a sentir el escalofrío de su grave crisis de liderazgo. Las encuestas periódicas realizadas por el CIS sobre la percepción de las situaciones política y económica, durante el decenio 1983-1993, trazan dos curvas que resultan notablemente esclarecedoras. Comienzan distanciadas en 1983, convergen en el pesimismo en 1991, y descienden paralelas de forma vertiginosa durante el bienio 1992-1993 hasta porcentajes insostenibles. Más del 70% de los españoles, en mayo de 1993, juzgaban tanto la situación económica como la política «mala» o «muy mala».

El Gobierno hegemónico, que había llegado al poder con un programa explícito de cambiar la sociedad, tenía que resistir la permanente tentación de convertirse en un «Gobierno de partido». Algo tan contradictorio como pretender ser al mismo tiempo la parte y el todo. Porque el Gobierno es por su propia naturaleza la única institución social que, sin dejar de ser la expresión de una parte de la sociedad, tiene que encarnar la voluntad política de todo el Estado y dirigir, por tanto, a toda la sociedad. La contradicción entre las convicciones y las responsabilidades debilitaba el liderazgo necesario para consolidar el consenso iniciado en la transición a la democracia. El ejercicio del legislativo con el apoyo único de la mayoría matemática en las Cámaras desincentivó a la oposición, con el grave riesgo de dar una imagen del poder sin alternativa. Por otra parte, las opciones en favor de políticas pactadas distanciaban al Gobierno de su propio partido. La conver-

gencia con Europa exigía ajustes considerables, juzgados siempre como antisociales por sectores amplios del propio partido más sensibles a las reacciones de los líderes sindicales.

Hubo que convocar las elecciones del 6 de junio (1993). Las urnas cambiaron sensiblemente la composición de los grupos parlamentarios. Desapareció la mayoría absoluta. El Gobierno mantenía la mayoría relativa, gracias a la promesa del «cambio del cambio», cuya substancia consistía en el nuevo «impulso democrático».

Gobierno y oposición entraron en un debate maniqueo hasta hacer imposible acuerdos imprescindibles, como la elección de un sucesor del Defensor del Pueblo y cubrir las vacantes de las instituciones constitucionales básicas. La población no podía comprender estas estrategias partidistas. Se perdió la visión del proyecto moral, necesario para la gobernabilidad del país. Se multiplicaron las incertidumbres internas. Y, en esa inseguridad, era lógico esperar el desánimo de la inversión, tanto nacional como de los capitales extranjeros.

La prisa es característica de nuestros procesos de cambio. Queremos ponernos al día cuanto antes. Alcanzar enseguida los logros que otros países consiguieron a través de varias décadas. Nos dejamos llevar con facilidad de las *representaciones colectivas* definidas por Durkheim. Tienen vida propia y cambian con facilidad. Responden a una fabulación consentida que hoy podríamos llamar «realidades virtuales». Progreso, permisividad y consumo eran dueños ya de la imaginación colectiva. Habíamos fijado nuestra mirada en una sola cara de Europa.

Frente a las representaciones colectivas, Durkheim situó la *conducta colectiva* de la «realidad-realidad». El conjunto de creencias, convicciones y sentimientos comunes de una sociedad, forma un verdadero sistema cuya evolución es mucho más lenta. Legisladores, líderes de opinión y modelos de referencia parecían haberse puesto de acuerdo para forzar el paso de la conducta colectiva.

Esta asincronía natural presentaba su rostro bifronte. Porque la conciencia colectiva o común de la sociedad española sigue siendo, a pesar de las apariencias «representativas», bastante tradicional. El clientelismo, el patrimonialismo, las actitudes autoritarias en el seno de las organizaciones públicas y privadas, el bajo nivel de nuestra cultura política, la torpeza para dialogar y comprender las razones de los otros, etc., permanecen enmascaradas bajo formas de modernización aparente.

Añádase a esto, el éxito que ha obtenido entre nosotros la ingeniería de la imagen. Los españoles presumimos de «saber vivir». Una sabiduría que mezcla la astucia con el arte de «quedar bien», de colocarnos «en buena posición», aunque tengamos que poner en juego todos los recursos de recomendaciones, amiguismos y apariencias. Américo Castro³ ve en la apariencia «un rasgo esencial hispánico». Esto no quiere decir que toleremos el engaño. El español presume también de una inteligencia especial para descubrir al mendaz y castigarlo duramente.

En la sociedad de masas la *notoriedad ocupa uno de los primeros puestos* en la jerarquía de valores. Se renuncia al rigor y a la coherencia con tal de conseguir un buen nicho en los «retablos mediáticos». Con la publicidad se consigue influencia, satisfacer el *ego*, buenos negocios e incluso situarse en las plataformas del poder. Fascina la «cultura del éxito» que tranquiliza la conciencia de los famosos, de los hombres de negocios y de los gestores públicos. Hasta los intelectuales buscan un sitio notable en los retablos mediáticos.

Nos sentimos dominados por la comunicación visual. Para ubicarnos en el tejido social, tenemos que entrar en el juego de las imágenes, de los signos, de los gestos y de los símbolos. Excitamos los estímulos ajenos para que se fijen en nosotros. Las técnicas de diseño más estrambótico y de las relaciones públicas pueblan nuestro ambiente y penetran a través de todos los poros de la sensibilidad moderna.

En la sociedad del conocimiento en tiempo real, sólo logran transmitir sus propios mensajes aquellos que adquieren publicidad o relevancia social. Tienden a perder interés e importancia las tribunas magisteriales. Los análisis abstractos, no visualizados, acerca de la realidad se han vuelto insoportables. Las plataformas mediáticas parecen respetar mejor la autonomía de los oyentes o espectadores. Estos eligen lo que les gusta, lo que les atrae en cada momento y pueden seleccionar maestros y mensajes.

La conciencia personal ha vivido durante siglos regida por un solo código ético impuesto, abstracto e impersonal. Cuando este código de la moral individual fue destronado, el español medio se quedó sin referencias, expuesto a la manipulación de los nuevos predicadores de la modernidad. Ahora tenemos que enfrentarnos con la ardua tarea de dar transparencia y verdad a la vida pública. Precisamente cuando el

³ Castro, A., *Aspectos del vivir hispánico*, Alianza, Madrid, 1970, p. 16.

cambio de rasante hace más pequeño el horizonte de visibilidad y estamos poseídos por la incertidumbre. Los movimientos de la «Ilustración» en España fueron débiles e insuficientes. Predominó la visión parcial de la «modernización». Esta puede quedar reducida a un mero espectáculo, a una forma engañosa de creernos que el sistema de las libertades nos sitúa, sin más, por decreto, en el plano europeo.

Moralismo sin moral

El fenómeno es bastante general. Las democracias occidentales echan de menos la ética en la vida pública. Después de proclamar los derechos se intenta ahora descubrir el principio de la responsabilidad. *«Prometeo, al que definitivamente han logrado desencadenar las fuerzas de la ciencia y de la economía, jamás conocidas, reclama ahora una ética que ponga en sus manos las riendas libremente aceptadas, a fin de impedir que el poder del hombre se convierta en su propia maldición»*⁴.

En España esta demanda de ética tiene colores propios con tintes sensacionalistas. Los vacíos éticos han sido descubiertos por los medios de comunicación. Pero este desvelamiento intermitente de hechos escandalosos protagonizados por gestores públicos, no eleva por sí mismo el nivel de una ética política. Probablemente, sin el conocimiento de estos escándalos, no habiéramos llegado a la conciencia colectiva de esta fuerte demanda de la ética que exige respuestas urgentes. No basta contar el número de corruptos, aunque sea una condición necesaria. La propia clase política trata de asumir el problema, sin obstaculizar la acción de la Justicia.

Lo que importa no es hablar de las personas, sino de los hechos en sí. Lo expresa adecuadamente el dicho castellano: *«los rufianes hablan de las personas, los caballeros se ocupan de las cosas»*. El cotilleo sobre tal o cual persona debería dejar paso a un conocimiento serio de los problemas que nos afectan. La instrumentalización partidista para la lucha política puede ser comprensible. Pero determinadas formas de denuncia tampoco contribuyen a recrear la moral pública.

⁴ Jonas, Hans, *Le principe responsabilité*, Cerf, Paris, 1990, p. 13.

Nos parece más importante reflexionar sobre esta carencia de estimaciones y valoraciones responsables, que ahora se pone en evidencia. El gran debate de hoy, particularmente referido a la acción política, a la financiación y organización de los partidos y al comportamiento de los administradores de la «cosa pública», tiene que enfrentarse en niveles más profundos con el «problema moral». Casi de repente, este país se ha poblado de moralizantes.

Preferimos pensar que estamos viviendo un «salto de calidad» en la cultura política: un cambio de comportamiento humano en el sentido más fuertemente antropológico de la palabra. Tenemos que pasar de la ética individual a la ética social. Porque es evidente que asistimos a una escisión práctica entre la dimensión íntima y el mundo social externo, entre la forma de comprenderse a sí mismo el individuo en su conciencia personal y la percepción de la realidad social a la que pertenece.

La ética tradicional aceptaba la objetividad de unos valores, principios y normas morales, la mayor parte de las veces de origen religioso. Se referían fundamentalmente a la conducta individual. Y se aceptaban habitualmente de forma pasiva, sin el ejercicio consciente de la libertad personal, esencial al comportamiento moral de la persona. Esa misma aceptación de un código moral único propiciaba la transferencia de las normas y «virtudes» individuales, incluso intersubjetivas, al plano de las instituciones sociales.

Esta transferencia hoy resulta insuficiente. La diversidad y la complejidad e interdependencia creciente de las instituciones públicas y los intereses privados tejen la sociedad actual. Las estructuras, también las políticas, aunque son producto de la actividad humana, condicionan la vida del hombre. La acción aislada de una persona, por muy recta que sea su conciencia, no es suficiente para cambiar dichas estructuras.

La ética social, en la situación actual, requiere ensanchar el conocimiento de la conciencia. La acción moral frente al problema de la seguridad, de la paz, del medio ambiente, de los flujos económicos mundiales, de las migraciones, etc., exige el conocimiento y el reconocimiento de la complejidad de los mecanismos que generan esos problemas. Ni siquiera es suficiente la conciencia de un pueblo o de una región del planeta. Hay que dilatar el conocimiento hasta horizontes mundiales, a fin de que puedan crearse estructuras proporcionadas a estos problemas que nos afectan a todos y tienen carácter de absolutos o prioritarios sobre nuestros propios problemas regionales.

El moralismo se complace en un discurso tejido de juicios morales que pretenden suplir a los análisis. No se enfrenta con las soluciones, no ayuda a descubrirlas. Sirve únicamente para aumentar la indignación moral y no pocas veces contribuye a oscurecer la visión de la realidad. Porque la conciencia autónoma tiene que madurar en el ejercicio de la libertad responsable, sin más imposiciones externas que las de la ley.

El moralismo no es camino para recrear la ética política. Su función termina en la invocación de unas leyes o de unos supuestos principios, normas o valores morales comunes. Las leyes sirven para impedir los abusos. Pero el respeto a la ley no es suficiente para moralizar el acto humano. Lo hará legítimo, pero no necesariamente moral.

Las democracias occidentales, también las de corte socialdemócrata, aceptaron la herencia del liberalismo. El credo liberal es fuente a lo sumo de legalidad estricta. Se asienta sobre los pilares del individuo, el derecho y el contrato. Todo lo más, podremos llegar a organizar un Estado garante, unas leyes transparentes y una justicia eficaz. Cubriremos unos mínimos de derecho y justicia. Pero aquellos que desconozcan sus derechos, no conseguirán, por la mera existencia de las leyes, ser respetados. Este es un nivel irrenunciable, pero claramente insuficiente.

La decisión personal normalmente se toma en circunstancias concretas de conflicto entre valores éticos, donde es fácil concebir como lícito aquello que objetivamente es ilícito. Más aún, la pura legalidad poco tiene que ver con la moralidad de un acto humano. Sin conciencia ética responsable, se vacía la moral. Un mundo de leyes y recelos, de contratos y figuras penales, de querellas y recursos, se ha mostrado insuficiente para respetar universalmente la dignidad humana. Los juristas, necesarios para la ordenación de los derechos, no tienen por qué convertirse en los clérigos de la democracia liberal.

La respuesta que ahora se intenta dar a la ruptura entre ética individual y ética social, en el vacío de principios y normas morales universalmente aceptadas, dada la insuficiencia del legalismo liberal, es la *ética aplicada*, que en modo alguno debe confundirse con la «ética de situación». Dentro de ella se buscan las soluciones a los problemas morales concretos de cada profesión y de cada función social. El auge de la ética aplicada es innegable. Los valores se están individualizando y las comunidades han perdido capacidad para imponerlos a los individuos. Todas las deontologías se mueven en plano de la ética aplicada. Tratan de llevar a la acción concreta los principios, descu-

biertos en el nivel fundamental, de darles vigencia en las distintas dimensiones y circunstancias de la vida cotidiana. Ahora bien, la filosofía ética no es unívoca, no es compartida unánimemente por los expertos. Los problemas surgen en los distintos ámbitos concretos de la vida social. Y en esos contextos concretos se plantean conflictos inéditos entre los mismos principios fundamentales.

El riesgo de dejarse llevar por el interés personal o del grupo es evidente. De esa amenaza sólo puede liberarnos el crecimiento de la conciencia moral en la medida que sea capaz de abarcar responsablemente la realidad social. El nudo del problema reside en el modo de percibir la responsabilidad. ¿Frente a qué o frente a quiénes tenemos que ejercer la responsabilidad? ¿Cómo percibir y valorar las consecuencias de una decisión política? Descubrimos con facilidad nuestras responsabilidades sobre el contexto inmediato de los males que pueden seguirse para nuestros familiares, amigos, correligionarios, etc. Podemos incluso exigir que toda decisión democrática sea transparente, no sólo a través del debate parlamentario. Cualquier alto responsable de la Administración Pública tiene que decidir entre varios proyectos legales, que han pasado antes por una cadena de microdecisiones técnicas. El gobernante puede desconocerlas o tratar de ocultarlas, para quedar más libre en la toma de decisiones. La transparencia es la exigencia fundamental de cualquier decisión democrática. Moralidad y transparencia se necesitan mutuamente. El gestor público no puede patrimonializar la noticia, debe estar siempre abierto al debate de los técnicos y de la opinión pública. Tiene que comprometerse a rechazar lo ilícito. Y para ello necesita tener conciencia de las fronteras, a veces confusas que separan la legalidad y la ilegalidad.

Deberíamos evitar el moralismo del que habla Etchegoyen (1991) como la insuficiencia del «vals de las éticas». La denuncia y el discurso moralista se limitan a tocar una música confusa, dentro de la cual las distintas parejas bailan con ritmos diferentes. La tarea ardua de nuestro tiempo consiste en dar ese salto cualitativo de la cultura política. Recrear la conciencia del *ethos* equivale ni más ni menos que a moralizar plenamente la decisión política, para que sea humana y moralmente responsable. Con leyes y justicia no basta: refuerzan la responsabilidad legal de la culpa y aun la responsabilidad política sin culpa, pero esta responsabilidad se queda aún a distancia de la verdadera solidaridad con el débil y de la verdadera lealtad a la sociedad.

El moralismo nos desvía del problema moral. Estas reflexiones sobre la ética política que necesitamos, nos llevan a la interpretación

moral que hacía Norman Brown de la historia de Esparta y Atenas. La primera representaría el paradigma de una sociedad inmoral compuesta por ciudadanos de fuerte ética individual que no llegan a descubrir los intereses colectivos. Atenas, en cambio, representaría a una sociedad moral de fuerte cohesión ética nacional y de bajo perfil moral individual. El sistema democrático es un proyecto moral que sirve para medir y superar los niveles de respeto, de responsabilidad y de cohesión nacional, siempre necesitado de revisar las normas morales y los valores que orientan las conductas, para que lleguen a ser universalmente compartidos.

Hay que pasar de los derechos a las responsabilidades. La crisis de nuestro proceso democrático obliga a realizar un gran esfuerzo por la lucidez. Lo lograríamos si fuéramos capaces de traducir los conflictos en desafíos comunes que unan y no desorienten a la opinión pública. A eso y no a otra cosa llamamos nosotros reconstruir la confianza en la política. Quedarse en la denuncia y en el lamento es una forma más de desmoralizar.

La «hora de la verdad»

Los españoles reservamos esta expresión del argot taurino para la suerte suprema. Encontramos en ella dos referencias útiles para dar cuenta de los actuales desafíos comunes. La «hora» es el momento propicio, culminante, la gran ocasión de demostrar lo que valemos o somos capaces de hacer. La «verdad» se refiere a nuestra capacidad de enfrentarnos con la «realidad» y, claro está, con los conocimientos de que disponemos para transformarla o introducir en ella las innovaciones necesarias. Ahí reside la clave de nuestro desarrollo humano, económico, social y político.

La economía española se vio envuelta en el año 1993 en un proceso de ajuste sin precedentes. Se puso de manifiesto la crisis de competitividad que venía arrastrando de años anteriores el sector industrial. Empezamos a respirar un clima de escasa confianza empresarial. El sector industrial y el de la construcción fueron los más afectados, con descensos del 9,4% y del 9% respectivamente. Los porcentajes de desempleados comenzaron a subir de manera alarmante.

Esta debilidad de la economía española no se puede atribuir exclusivamente a la coyuntura internacional. Los expertos dan especial importancia a los obstáculos y limitaciones internas de nuestro apa-

rato productivo y de los mercados. La crisis - se nos dice - es estructural. Tiene que ver con las estructuras de tipo económico. Y éstas a su vez con las instituciones de tipo cultural o social. Es decir, con comportamientos y actitudes no estrictamente económicos.

Lo que hace competitivo a un país no es la pura economía, sino el orden social en su conjunto. Por tanto, más que hablar de una economía competitiva, importa examinar la competitividad de nuestro orden social. Y a él queremos referirnos particularmente cuando hablamos de la «hora de la verdad».

Nuestro mundo social está plagado de catástrofes: de costumbres sociales propias de sociedades cerradas o tribales, clientelistas o amiguistas, que reducen el grado de cohesión y de cooperación para la producción. La misma sociedad que ha creado un sistema de contrataciones laborales basado sobre la familia y el clientelismo, se irrita cuando descubre esas mismas prácticas en la vida pública. La permisividad de todo tipo de juegos de influencias y corruptelas sociales, características del abuso funcional del grupo primario (familia, amigos), incapacita para el riesgo de la innovación empresarial y social. Todo el mundo tiende a «colocarse», a contar con un salario fijo, poco sensible a la productividad y a la marcha económica de las empresas. En el sector servicios, las regulaciones proteccionistas del funcionario, de los cuerpos profesionales, de los empleados en las grandes empresas públicas, atraen a jóvenes y adultos de todas las categorías sociales. Crece la dualidad entre los que disfrutan de la seguridad en el empleo y el número excesivo de trabajadores eventuales o temporales. Se bloquea la movilidad geográfica con políticas que priman la vivienda en propiedad. Y, lo que es más lamentable, el sistema educativo se distancia de las necesidades de cualificación del aparato productivo.

No podemos pasarnos la vida culpando a los empresarios porque no asumen la *cultura del riesgo*. Mucha gente cree que los empresarios son, por antonomasia, personas que asumen riesgos. Pero, como indica su misma etimología, la «personalidad emprendedora» se define por la capacidad de «emprender», es decir, de «innovar». El verdadero empresario no busca riesgos, sino oportunidades para crear riqueza con el mínimo riesgo, para todos los accionistas y empleados que colaboran con él en la organización creadora. Es toda la sociedad, la de los empleadores y la de los empleados, la de los administradores y la de los administrados, la de maestros y discípulos, la de los investigadores y la de los que invierten su esfuerzo físico, la que tiene que asumir la cultura del riesgo. «*La innovación es la función específica de*

*la iniciativa empresarial, tanto en una empresa ya existente o en una institución pública, como en un negocio nuevo, montado por una sola persona en la cocina de su casa*⁵.

Esta «hora de la verdad», para los españoles no es otra que la «hora de innovar»; la del esfuerzo que seamos capaces de realizar para poner en marcha la innovación. Ya es hora de que entendamos que la solución de nuestros problemas depende ante todo de nosotros, de nuestras organizaciones sociales y políticas, y no sólo de nuestro desarrollo económico.

Se dice de los españoles que «sabemos vivir». Y con esa «sabiduría» se suele asociar el «arte de aparentar» y de «saber» echar la culpa de nuestras desgracias a los demás. Consideramos al Estado y a los poderes políticos como responsables máximos de la situación individual.

La crisis de nuestra economía es fundamentalmente una crisis de orden social y político. Hay que hablar claramente de la competitividad de nuestra cultura social y política. Lo económico y lo social no pueden concebirse como dos subsistemas separados o bifrontes. Tampoco debemos relacionarlos como si lo económico impusiera sus leyes casi matemáticas sobre lo social, que funcionaría según variables poco importantes para el aparato productivo. Menos aún podemos admitir que la estructura económica determine la cultura y el comportamiento social en general.

Tomamos como ejemplo de innovación a la empresa, ya que es la que se juega su existencia en su capacidad innovadora. Todas estas reflexiones deberían afectar por igual al resto de las organizaciones sociales especializadas, como la universidad, los hospitales, las cooperativas, los seguros, las fundaciones, los clubes, etc. La empresa proporciona medidas y criterios que de alguna manera sirven para comprobar hasta qué punto los españoles hemos entrado en la *sociedad del conocimiento*. Una sociedad, según P. F. Drucker, en la que los tradicionales factores de producción, como la tierra, el trabajo y el capital, no desaparecen, pero pasan a ser secundarios respecto a «los conocimientos». Estos se han convertido en los factores fundamentales, tanto de la economía como de la organización social en su conjunto.

⁵ Drucker, Peter F., «The discipline of innovation», *Harvard Business Review*, 1986.

Sabemos que los conocimientos en sí mismos no producen nada. Sólo son productivos, cuando logramos integrarlos en la tarea característica de una organización destinada a producir educación, salud, bienestar, bienes culturales, sentidos de vida, solidaridad, sensibilidad hacia el medio ambiente, etc. A todas ellas las llamamos aquí «organizaciones especializadas», para distinguirlas del Estado, de la familia y de la comunidad, que tienen que acoger a todos por igual, garantizar su estabilidad y crear marcos favorables al desarrollo de las autonomías personales y colectivas.

Los conocimientos, para que desarrollen su función innovadora, tienen que encarnarse en las organizaciones especializadas. La innovación no puede realizarse sin desestabilizar. Cuando una organización, sea ésta empresarial o religiosa, docente o asistencial, se burocratiza, deja de ser innovadora. La burocracia no tolera las tensiones entre la responsabilidad de la organización y la del individuo.

Los españoles no estamos acostumbrados a tolerar los conflictos. Tendemos a plantearlos en forma de dilema. Hemos heredado la cultura del «*aut, aut*» del «esto» o «lo otro», en vez de aquella otra actitud más racional del «*et, et*», del «esto» y «lo otro». Aun en las asociaciones libres (clubes de opinión, de deporte, culturales), se tiende a resolver la discrepancia con procedimientos autoritarios. Nuestra tendencia a la claridad simplificadora, enemiga de la complejidad, nos lleva a descalificar al discrepante, a poner de relieve sus limitaciones e ignorancias, a considerarlo de menor nivel intelectual. Nuestra torpeza para el diálogo es proverbial. Esta conducta perturba gravemente la vida política. Más adelante, cuando hablemos de la «verdad democrática», nos ocuparemos de esta cuestión. Nada más absurdo que pretender despejar la incógnita de una ecuación eliminando uno o varios de los factores. Cuando un problema se hace secular, llegamos a pensar que no tiene solución, la mayoría de las veces porque nos negamos a replantearlo en otros términos o no damos valor a otros factores que nuestra tozudez se niega a reconocer.

Volvamos al ejemplo de la empresa como organización innovadora por antonomasia. Joseph Schumpeter definió la innovación como «destrucción creadora». Cualquiera que posea unos conocimientos, caerá enseguida en la cuenta de que tiene que adquirir otros. Si, por el contrario, se encierra cómodamente en sus conocimientos heredados o adquiridos en su juventud y se niega al aprendizaje permanente, sus teorías dejarán de serle útiles, incluso él mismo empezará a ser perjudicial para la organización.

A las organizaciones innovadoras les daña especialmente la endogamia intelectual. Si concentran su esfuerzo en defender el pasado y se niegan a cruzar sus ideas con otras que no sean parientes de las propias, practican la endogamia del conocimiento, evidentemente empobrecedora. Por otra parte, la experiencia demuestra que solemos defender con más obstinación aquellas ideas que no hemos concebido nosotros mismos. Sencillamente porque no son estrictamente concepciones nuestras (*conceptus* viene de concebir) y, por tanto, no sabemos medir exactamente sus limitaciones, sus insuficiencias y su carácter arcaico. Las conservamos tal como las recibimos, como si al revisarlas o analizarlas estuviéramos faltando a la lealtad que debemos a nuestros maestros, a nuestros progenitores o a nuestras tradiciones. Matamos las tradiciones por mimetizar más que por inventar.

Pero resulta que los cambios que afectan más profundamente al cuerpo de conocimientos, no surgen, por lo general, de su propio dominio o familia. La innovación de la industria alimentaria es hija del cruce entre conocimientos de diversos campos: de la genética, de la química, de los procesos de industrialización y de mercado, y de la agricultura. Los medios de comunicación de masas no se hubieran desarrollado sin el cruce de las ciencias de la información y de la tecnología electrónica. La industria farmacéutica se hubiera quedado en alquimia, si no hubiera aplicado los conocimientos de la microbiología, de la genética y de la organización industrial.

A las organizaciones sociales hay que aplicarles criterios semejantes a los de la innovación empresarial. La empresa misma tiene necesidad de introducir en su organización innovaciones sociales. Milton Friedman, economista y premio Nobel, se equivocaba al afirmar que la responsabilidad de una empresa se limitaba a conseguir rendimientos económicos. Ciertamente ésa es su principal responsabilidad, porque si no hay beneficios económicos iguales al menos al coste de su capital, se comportaría de manera irresponsable y pondría en peligro su propia existencia.

También peligra la vida de una empresa que no sepa organizar la dirección del cambio en su propia estructura. Tendrá que velar especialmente por la capacitación y cohesión de los equipos humanos, elevar constantemente el nivel de información interna. Todos tendrán que tener una idea exacta de los proyectos y de los resultados conseguidos. Los que estudian el mercado, los que llevan la contabilidad de los costes y los que comprueban la calidad del producto, tienen que conocer los resultados de las investigaciones de los otros departamentos. Todos tendrán que actuar según el modelo de equipo que se

elija para el funcionamiento de la empresa. En un equipo de fútbol, por ejemplo, cada jugador desempeña una función y se mueve en un espacio determinado, pero el equipo en su conjunto actúa como una unidad.

Los equipos de pensamiento e investigación, que funcionan como auténticas comunidades científicas interdisciplinarias para contrastar y poner en común los conocimientos, se han hecho imprescindibles en toda empresa u organización responsable de su función innovadora.

La dirección del cambio en el seno de las organizaciones obliga a redefinir los ámbitos del poder. En modo alguno debiera confundirse el poder con el mando. Cada día es más notoria la que podríamos llamar «revolución de los profesionales» dentro de las empresas. Esto obliga a redefinir la función y competencias del Consejo de Administración. Este representa a la propiedad y controla la dirección. Pero el mando y la responsabilidad directa de la gestión, para que sea eficaz, propiamente innovadora, deberá confiarse al equipo de profesionales especializados. No es bueno ser a la vez juez y parte, árbitro y gestor. La experiencia anglosajona podría servirnos de ejemplo. El presidencialismo intervencionista, al modo de la empresa familiar patrimonialista, puede significar un lastre letal para la empresa, particularmente si los consejeros son elegidos, no en función del accionariado al que representan, sino por amiguismo, apellidos y mera relevancia social o política.

Criterios semejantes son aplicables al funcionamiento de una universidad, de un hospital, de un equipo quirúrgico y de cualquier organización especializada y responsable. Tendrá que estar dispuesta a abandonar un modo de proceder menos rentable. Lo mismo que un banco tiene que estar dispuesto a disminuir el número de analistas del crédito y aumentar el de asesores de inversiones cuando lo pida la demanda, una universidad técnica perfectamente preparada para enseñar física, tiene que estar dispuesta a dar preferencia a los genetistas, si quiere responder a la demanda social. Las organizaciones deben funcionar como seres vivos que incorporan los nuevos conocimientos y aplican las nuevas tecnologías modificando sus plantillas.

Hay que tomar buena nota de que una gran parte del empleo destruido ha desaparecido para siempre. Los nuevos empleos que se creen, necesitarán trabajadores formados en otras tecnologías. Surgirán continuamente nuevas especialidades, nuevos procedimientos

y nuevas destrezas, que cambiarán el mercado de trabajo. La sociedad del conocimiento es más dinámica y su repercusión social será cada vez más profunda. No es sólo la ciencia o la tecnología las que crean nuevos conocimientos y dejan anticuados los anteriores. El cambio o la innovación social es tan importante como la innovación científica.

La responsabilidad social de la empresa tiene que ver con el ambiente, con los empleados, con los clientes y con todos los agentes externos. Una empresa innovadora dinamiza la sociedad. Contribuye no sólo al progreso económico de la sociedad, sino a su desarrollo humano y social: enriquece la oferta de bienes y servicios para satisfacer las demandas, libera energías humanas, crea una red integradora de clientes-ciudadanos y es un actor esencial de la sociedad del conocimiento.

En estas «Consideraciones Generales» nos hemos referido a la empresa como ejemplo de fuerza motriz dinamizadora. También ella corre el riesgo de burocratización y anquilosamiento, debido más bien a tradiciones autoritarias y patrimonialistas heredadas. Las organizaciones sociales que hemos llamado especializadas, experimentan con más fuerza la tentación de la inercia, de la burocratización, que las incapacita para la innovación.

Empresas y organizaciones sociales viven con más fuerza la obsesión por la «imagen pública», por «aparentar que hacen cosas importantes». Y a este fin dedican grandes esfuerzos y elevadas sumas de sus recursos económicos. No buscan métodos de valoración de sus productos. No quieren someterse a las leyes del mercado y de la competencia, porque hinchán con más facilidad su cuenta de resultados. Sin organizaciones sociales competitivas, capaces de asumir riesgos, será más difícil construir un orden social competitivo. No es concebible una sociedad del conocimiento sin dinamicidad competitiva.

Pero ha llegado la hora de la competitividad, no sólo para el aparato productivo, sino para toda la sociedad. Esta es, a nuestro juicio, para España la «hora de la verdad», y con ella la de la suerte suprema, para acabar con la ficción, para poner en su sitio a los ingenieros de la imagen y a los especuladores del amiguismo y de la simple relevancia social. La indignación moral contra los corruptos se quedaría a medio camino, si siguiéramos tolerando la permisividad social con los embaucadores de todo tipo. Todas estas corruptelas actúan como anestesia de la responsabilidad social.

Si el aparato productivo, con ser el más realista, acusa una pérdida de confianza en sí mismo, reflejo de un orden social no competitivo en sus organizaciones básicas, no podemos terminar estas «Consideraciones Generales» sin apuntar a las causas de la desconfianza imperante en la vida política española.

Arrastramos una herencia antigua que identifica a la política y a los políticos con la mentira, con el «todo vale para conquistar y mantener el poder». El sistema democrático se basa en la confianza en las instituciones y en los políticos. No es suficiente el formalismo legal. Todas las formas de mentira pública afectan al corazón mismo de la convivencia democrática.

Comencemos por afirmar que los españoles no hemos llegado a aceptar seriamente el pluralismo político. La Constitución lo proclama como uno de los «*valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico*» (art. 1.1). Quizá lo confundimos con el relativismo moral. Los principios morales, considerados como dogmas, parecían ser cimiento de nuestras seguridades colectivas. El pluralismo político y cultural parecía fragmentar la unidad nacional o al menos apartarnos de nuestras esencias históricas.

Las oposiciones virulentas fueron la consecuencia de puntos de vista irreductibles en la convivencia social. En la crispación de las diferencias se termina aceptando la victoria del más fuerte, del más brillante o del mejor organizado. Hemos abandonado la guerra de las armas, pero seguimos manejando las palabras como balas mortíferas. Sinceramente, no hemos llegado a reconciliarnos con los discrepantes, sean éstos pueblos, partidos políticos, agentes sociales organizados o simplemente ciudadanos. La aceptación del pluralismo no equivale a tolerar las relaciones de fuerza que esconden polvorines de virulencia o, al menos, actitudes de pasividad en los vencidos.

La palabra en sí misma es poder. En el entramado de fuerzas que se articulan en la sociedad moderna, los que pueden llegar con su palabra a las audiencias más numerosas, ejercen un poder superior al de los que no tienen la ocasión de acercarse a un micrófono o de situarse ante las cámaras. El mismo hecho de salir en la prensa, la radio o la televisión responde más a destrezas y artificios que a razones de representatividad. Muchos representantes del pueblo tienen menos posibilidades de ejercer poder que un profesional de la comunicación. Entre las dualidades características de las sociedades avanzadas hay que dar especial importancia a ésta: las minorías que pueden hablar

en los medios y aquellos más numerosos marginados del discurso público. Estos padecen una nueva forma de indefensión que debería ser atendida.

Es necesario comprender que las decisiones políticas tienen que nacer de la discusión pacífica, regida por las razones. Tenemos que ceñirnos a un solo aspecto fundamental de la convivencia, relacionado directamente con este momento de crisis o maduración del proceso democrático que seguimos llamando la «hora de la verdad». Creemos que el primer problema, no el único, se plantea en el plano de la «ética de la discusión». Y en ella se van a centrar las consideraciones siguientes. No desconocemos la necesidad de ser intolerantes con el atropello de ciertos valores absolutos como los derechos del hombre, garantizados por nuestra Ley Fundamental. Sin embargo, podemos discutir y mostrarnos mucho más tolerantes con los que promuevan, con medios democráticos, reformas del texto constitucional.

Los griegos identificaban el espacio político con el del intercambio de la palabra. El hombre es el ser de la palabra y no puede ser considerado político, si no respeta las leyes mínimas del diálogo. Si redujéramos la política a la gestión de cosas o de fuerzas mecánicas impersonales, no tendríamos necesidad de la palabra. El hombre está dotado de palabra, porque no puede vivir sin representar sus deseos, sus aspiraciones y sus intereses. Los tiene que expresar, incluso para descubrirlos, para identificarlos y para llevarlos a cabo. No debería ser necesario recordar principios antropológicos tan elementales. La primera victoria sobre la violencia consiste precisamente en la recuperación de la confianza en la palabra. En el lenguaje popular concedemos al «hombre de palabra» una alta calificación moral.

Por el contrario cuando la palabra es tratada como mercería, herimos gravemente el corazón de la política. El tráfico de palabras como «justicia», «democracia», «libertad» y «progreso» no afecta únicamente a valores externos al hombre; corrompe la relación humana en la que se dirime, no solamente el valor de las cosas, sino el ser mismo del hombre y de sus posibilidades de convivencia. Por eso no exageramos cuando afirmamos que *el tráfico del lenguaje constituye la violencia más fundamental de la vida social y política: es la inmoralidad misma en estado puro*. El análisis de la mentira política, del martilleo publicitario sobre la opinión pública, desvela un género de violencia o de oculta dictadura. El hecho mismo de que estas afirmaciones puedan parecer exageradas, demuestra hasta qué punto hemos dejado de comprender la naturaleza de la vida política, enraizada en la naturaleza del hombre como ser social, dotado de la palabra.

Los que priman la eficacia pragmática sobre la persuasión de la palabra, los que se valen del sofisma retórico, desnaturalizan el discurso público y abren el camino a las trampas que hacen inviable la convivencia. Platón no soportaba a los sofistas, porque utilizaban sus habilidades retóricas para adueñarse del poder. La perversidad de los totalitarismos consiste esencialmente en la apropiación del sentido de las palabras. Las expresiones claves de la vida política son reducidas a un sólo sentido impuesto por el dictador. El mismo hecho de «poder hablar» de «poder expresar los propios juicios» es concedido o negado a los ciudadanos, según vaya en favor o en contra del proyecto político que el poder trata de imponer. Los dictadores se atreven a firmar convenciones internacionales conscientes de que palabras como «derecho» y «libertad» en su propio país tendrán solamente el sentido que ellos quieran darles. Las corrupciones más sutiles del lenguaje que utiliza los líderes democráticos no son de naturaleza distinta a la de esas situaciones límite de las dictaduras.

La mentira pública es irreconciliable con la democracia. No es sólo una falta moral, es un tremendo error político. Nuestros representantes en modo alguno pueden sustituirnos. Y lo consiguen con las nuevas técnicas del *marketing* político, conseguido a fuerza de repicar la matraca de los eslóganes publicitarios, de la utilización de los medios y de los sondeos de opinión, que hacen hablar al público sin él o a pesar de él. El análisis de estos hechos podría llevarnos a la sospecha sobre el valor de nuestro sistema representativo.

No basta legitimar con leyes el pluralismo ideológico, si seguimos mostrando tanta condescendencia con la manipulación del lenguaje por parte de los políticos, columnistas y líderes sociales. Tenemos perfecto derecho a exigirles rigor en sus expresiones y respeto a los conceptos. Unos mínimos éticos de la discusión tienen que ser observados para que no se rompa la confianza en la globalidad del sistema. La simplificación maniquea, la pretensión ideológica de globalizar los intereses y la criminalización del adversario se han convertido en moneda corriente del mercado de las ideas. No existen dos campos, el del bien y el del mal, nítidamente separables. Nadie tiene derecho a identificarse con el bien para culpar al adversario. Hablar, a la altura de nuestro tiempo, de fuerzas «progresistas» y de «fuerzas reaccionarias», de «franquistas» y «demócratas», es una forma de corromper el lenguaje y de fomentar la incultura política. Quien se presenta como promotor del proceso democrático y del pluralismo ideológico no tiene derecho a atrincherarse en las medias verdades y en los tópicos del pasado para diabolizar al adversario. Con la descalificación del dis-

crepante, no sólo se comete una injusticia; se da carta de naturaleza a la violencia incompatible con la convivencia.

* * *

Antes de concluir estas «Consideraciones Generales», volvamos la mirada para contemplar el panorama de conjunto. Los cambios económicos y sociales acortan de momento la visibilidad. Nuestro reloj no marca la misma hora de Europa. Surcamos mares desconocidos y los vientos parecen haber cambiado de dirección. No podemos confiarnos sin más al «cambio de ciclo». Gran parte del empleo que se está destruyendo, no se volverá a crear. Los problemas mundiales no están sometidos a los típicos vaivenes de los ciclos económicos y sociales. Porque entran en juego factores nuevos y poderosos que reforman profundamente los sistemas. Tal confianza en los ciclos equivaldría a dejarse llevar por el impulso del oleaje que termina por devolvemos con su resaca al punto de partida.

La innovación, y con ella el espíritu emprendedor, es el nuevo punto de referencia. Para conseguirlo hay que poner en juego los nuevos conocimientos como factores de producción y desarrollo. No podemos seguir engañándonos a nosotros mismos con la apariencia de la imagen y de los sofismas retóricos. Ha llegado la «hora de la verdad». No creemos que pueda conseguirse la competitividad deseada en nuestro orden económico, sin poner las bases de un orden social que armonice la competitividad con la justicia. Cualquier profesión, cualquier organización social, como cualquier empresa, se juega su existencia en su capacidad de innovación. Ahí es donde tiene que concentrarse el esfuerzo de la lucidez y de la competitividad.

La democracia no es sólo un régimen político. Es, sobre todo, una forma de vida que tiene que emproar la ruta de su propia superación moral. Su funcionamiento puede y debe ser sometido a una profunda crítica, abrirse a nuevas aportaciones de la ciencia política para un mundo enteramente nuevo. No basta que juzguemos severamente los casos episódicos de corrupción. Equivaldría a dejarla envejecer prematuramente. Tenemos que reconstruir el discurso público, para hacerlo más riguroso, transparente, verdadero. Lo que importa es elevar la cultura política. Una tarea no exclusiva de los políticos, sino de todos los actores sociales, porque, como afirmaba Epicteto en el siglo II, *«lo que turba a los hombres no son las cosas, sino la opinión que ellos tienen sobre las cosas»*.